UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
Tesis Licenciatura en Trabajo Social

Protección de los derechos de la Infancia:
una mirada desde la intervención judicial con las familias

Romina López Echeverri
Tutor: Fernando Leguizamón

2019

INDICE

Introducción.....	1
Objetivo General.....	6
Objetivos específicos.....	6
Metodología.....	7
Capítulo 1. Familia e Infancia: concepción histórica y estrategias de protección.....	10
1.a Contextualización histórica de la protección a la infancia.....	10
1.b Infancia y familia en el Uruguay de hoy.....	18
Capítulo 2. Intervención judicial: descripción del proceso y reflexiones acerca de su impacto en los niños y las familias.....	23
Conclusiones.....	40
Bibliografía.....	43
Anexos.....	

INTRODUCCION

La presente monografía constituye el Trabajo Final de Grado de la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales- Universidad de la República. En la misma, se pretende abordar la intervención que realiza el Poder Judicial de nuestro país sobre los tutores legales cuando se considera que existen derechos vulnerados o amenazados en los niños¹. Este tema se enmarca en la protección de los derechos de la infancia y el rol que cumple la familia y el Estado como garantes de los cuidados y la reproducción social de la misma.

Como punto de partida, se tomarán en cuenta aquellas situaciones que son denunciadas ante un Juzgado de Familia o Seccional Policial, por considerar que existe violación sobre uno o más derechos del niño. Para ello, se tendrá como referencia el Juzgado de Familia de la ciudad de Colonia del Sacramento por encontrarse quien suscribe este documento, radicada en esta zona, así como también por la facilidad en el acceso a la información.

La elección del tema de estudio de esta monografía estuvo vinculada en primer lugar por un interés personal en lo que respecta a la temática de los derechos y protección de la infancia. También dicho interés surgió luego de haber realizado las prácticas pre profesionales de Metodología de la Intervención Profesional I (M.I.P. I) “Adolescentes en infracción con la ley” a cargo de la docente Sandra Leopold, teniendo este como objetivo la observación de la aplicación de las políticas de infancia, que implementa uno de los dos ejes que establece el Código del Niño: “la infracción”. Luego, en el marco de la asignatura M.I.P. II quien suscribe se insertó en el Programa APEX-CERRO desarrollándose la práctica en la Escuela n° 334 con el objetivo de abordar la problemática de violencia, bajo la supervisión de la docente Laura Paulo. Finalmente, en M.I.P. III la práctica se enmarcó en supervisión de Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (I.N.A.U.) a cargo del profesor Rodolfo Martínez abordando específicamente el Programa Calle: centro de referencia “Casacha”, interviniendo con niños y adolescentes en situación de calle.

¹Se utilizará el término “niños” para referirse tanto a niños como niñas.

Sumado a ello, mi actividad laboral actual está vinculada al trabajo y al abordaje de la infancia y adolescencia ante lo cual desde la disciplina de Trabajo Social surge un constante cuestionamiento y reflexión acerca de las estrategias y prácticas de intervención llevadas a cabo con las familias con el objetivo de fortalecer su rol de protección. En este marco, surge la complejidad de analizar la intervención judicial por estar estrechamente ligada a la demanda cotidiana de intervención en determinadas situaciones, así como también, la habitual interrogante profesional acerca de qué situaciones ameritan o no una intervención judicial cuando la familia no ha logrado modificar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el niño.

A partir de todo lo anterior surge el deseo de poder realizar una aproximación a la reflexión crítica de este proceso, revaluando las prácticas cotidianas de intervención y el sentido que se le da a las mismas desde la propia disciplina.

Por otro lado, la actuación judicial representa una de las formas en la que interviene el Estado ante diversos problemas como son en este caso los que involucran a la infancia, legitimada por un Código normativo que habilita la misma. Se deposita en esta institución la capacidad de resolver y mediar en situaciones intrafamiliares mediante la coacción de actuar según disponga el Juez, en base a la interpretación que realiza este de los elementos que le son presentados por los actores involucrados. Tal tarea debería estar impregnada de una crítica reflexiva donde se problematicen las intervenciones llevadas a cabo, sin embargo, desde este estudio se considera que son pocos los análisis que se han elaborado al respecto pudiéndose desde esta disciplina contribuir a dicha reflexión.

Cabe mencionar que se ha realizado una búsqueda bibliográfica en la página web de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales sobre la intervención judicial en situaciones de vulneración de derechos de la infancia, destacándose la poca literatura existente que analice la temática desde el abordaje de las Ciencias Sociales. El material encontrado hasta el momento aborda el tema desde una perspectiva de Derecho enfocándose en lo procedimental validando la necesidad de pensar dicho proceso.

Uno de los ejes que se encuentra en discusión desde hace algunos años es la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia en el Uruguay, así como también

la eficacia de los mecanismos institucionales existentes para garantizar su efectivo cumplimiento. Esto ha generado un cambio de paradigma acerca de cómo es concebida la infancia y el modo de intervención del Estado (a través de sus diversas instituciones) y organizaciones de la sociedad civil, acompañado por cambios jurídicos donde se inscriben los derechos de protección a la misma. De esta forma, se ha pasado de una intervención más tutelar enmarcada en la Doctrina de la Situación Irregular, (donde el niño era percibido como objeto y las conductas de riesgo o abandono eran vinculadas al delito) a la Doctrina de la Protección Integral la cual resalta el carácter de sujetos de derecho de niños, niñas y adolescentes reconociendo que estos son seres en desarrollo y por tal motivo deben ser protegidos y cuidados, modificándose así los mecanismos normativos para garantizar su efectiva promoción, protección y atención.

En lo que respecta a los instrumentos jurídicos existentes en nuestro país en lo que refiere a la protección de la infancia y la adolescencia, se destaca la Convención sobre los Derechos del Niño (a partir de ahora C.D.N.), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 del 20 de noviembre del año 1989, siendo ratificada por Uruguay el 28 de setiembre de 1990 a través de la Ley N°16.137. Con dicha ratificación, nuestro país se compromete a realizar los cambios normativos necesarios para aplicar y garantizar los principios que allí se detallan enmarcados en el paradigma de la Protección Integral. De esta forma, el 07 de setiembre del año 2004 mediante la Ley N° 17.823 se aprueba el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia (a partir de ahora C.N.A.), concibiendo a los niños y adolescentes como sujetos titulares de derechos y libertades propias.

Siguiendo con lo expresado anteriormente y considerando que los niños son sujetos aún en desarrollo por lo cual necesitan un tratamiento especial y diferenciado de todas las personas, el Código reconoce en primer lugar, que la familia es el ámbito más adecuado para la protección integral de los derechos del niño. Es en el núcleo familiar, ya sea con padres o tutores legales donde los mismos deben recibir el cuidado y atención necesaria para su correcto desarrollo. Se normatiza esta responsabilidad de la familia, pero también se asigna al Estado la facultad de intervenir cuando los procesos familiares fallan en la

protección de estos derechos o vulneran los mismos. El Artículo N° 7 del C.N.A. en su inciso 3 detalla:

“(…) En casos de insuficiencia, defecto o imposibilidad de los padres y demás obligados, el Estado deberá actuar preceptivamente, desarrollando todas las actividades integrativas, complementarias o supletivas que sean necesarias para garantizar adecuadamente el goce y ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes.” (C.N.A. Art.7)

El organismo con competencia jurídica para atender aquellas situaciones donde se denuncie que existe vulneración de derechos de un niño o amenaza de ello, es el Juzgado de Familia representado por la figura del Juez de turno. Este dispondrá para sus actuaciones la presencia de defensores de oficio (cuando corresponda) para las partes involucradas y fiscales contando con el asesoramiento de técnicos (Trabajador Social, Psicólogo, Psiquiatra, Médico Forense) de considerarlo necesario. Esta intervención se encuentra amparada por el artículo N° 117 del C.N.A. donde se determina que, siempre que los derechos reconocidos sean vulnerados o amenazados se dispondrán las medidas correspondientes para su atención, derivándose luego en el Sistema Judicial con el objetivo de intervenir en caso de que se requiera para generar un cambio en la situación de vulneración.

Los principales derechos que se inscriben normativamente en el C.N.A son: derecho a la vida, a vivir en familia, de identidad, alimentación, salud, educación, participación, recreación, integridad y dignidad, entre otros; por lo tanto, cuando los mismos se encuentran en riesgo se interviene.

Con el cambio de paradigma, se presenta desde lo discursivo y normativo una ideología de reconocimiento y promoción de los derechos otorgando a todos los niños el carácter de sujetos de derechos, pero surge la interrogante de cómo se aplica en la práctica desde el ámbito judicial este nuevo paradigma sobre todo en lo que respecta a las intervenciones o prácticas sociales de carácter tutelar o de control social dirigidos hacia aquellos sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Del mismo modo, qué sucede con aquellas familias que, debido a su contexto socio económico y cultural

muchas veces no pueden dar la respuesta esperada o aceptada por el resto de la sociedad de acuerdo a las normas sociales imperantes en lo que refiere al amparo y cuidado de los niños. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta que el ejercicio profesional se vincula desde las diferentes instituciones con esta población, interesa en este trabajo reflexionar acerca del abordaje realizado con las familias que se han visto expuestas al sistema judicial y cómo este determina (o no) la intervención profesional con dicha familia.

El sistema judicial obliga a los adultos responsables a exponer su vida y arreglos intrafamiliares quedando a partir de allí determinados a accionar según lo requerido. En esta línea, es importante analizar cuáles son, si existen, las herramientas con las que cuenta el núcleo familiar que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social debido a su status socioeconómico para poder dar respuesta a lo requerido por el sistema judicial una vez que ingresan a dicho ámbito. También se desea conocer la eficacia de la orientación y apoyo brindado por este en representación del Estado como fuera dispuesto en el marco normativo.

“Si el abandono es la instancia a la que recurren quienes no quieren abandonar pero no pueden mantener, la resolución de la situación no puede jamás quedar solo en sus manos. (...) además, inculcados por su pobreza, que se juzga como pereza o negligencia, por su lenguaje que no es acorde a los patrones de las buenas maneras, por sus formas de relacionamiento intra y extra familiar que desacomoda los parámetros establecidos para otra clase social que es, justamente, la encargada de decidir sobre ellos.” (Iglesias, 2000, p. 11)

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se plantean las siguientes interrogantes: ¿Qué características tiene la intervención estatal en el ámbito judicial cuando existe la presunción de amenaza o vulneración de derechos? ¿Qué nuevos procesos o mecanismos se llevan a cabo a partir de esta intervención? ¿Qué sucede cuando los adultos referentes no pueden garantizar a sus hijos los cuidados necesarios por la situación de riesgo y vulnerabilidad que atraviesan? ¿Puede la intervención judicial generar algún cambio estable en esa situación? ¿Cuál es el rol del Trabajo Social en este proceso? ¿Qué impacto tiene la intervención profesional en este proceso? ¿Se judicializa o no?

A partir de lo anterior se plantearán los siguientes objetivos:

Objetivo general:

Analizar la intervención del Poder Judicial en las situaciones de denuncia de vulneración de derechos hacia niños y niñas (amparadas en el artículo 117 del C.N.A.) en la ciudad de Colonia del Sacramento.

Objetivos específicos:

1-Identificar las principales causas que dan inicio a una intervención judicial en el ámbito familiar en situaciones que involucran a niños y niñas.

2-Describir cómo interviene el sistema judicial, con las familias en su función de protección de los derechos de la infancia y los procesos que genera una vez que interviene con la misma.

Esta monografía se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se plantea la metodología utilizada la cual es de carácter cualitativa aplicándose como técnicas de investigación la entrevista y el análisis documental. Posteriormente, se plantea el primer capítulo titulado *“Familia e Infancia: concepción histórica y estrategias de protección”*, en donde se realiza una aproximación acerca de cómo se fue concibiendo a la familia y a la infancia y los sistemas de protección a la misma, a lo largo del tiempo, hasta llegar a la actualidad describiendo sus características principales y los procesos ocurridos en Uruguay en cuanto a la conformación del sistema de protección actual. En el segundo capítulo: *“Intervención judicial: descripción del proceso y reflexiones acerca de su impacto en los niños y las familias”* se estudiará el desarrollo del proceso judicial de intervención en situaciones de vulnerabilidad en donde se encuentran involucrados niños estudiándose su aplicación en el Juzgado de Familia de la ciudad de Colonia. Finalmente, se expondrán las principales conclusiones las cuales permitirán reflexionar acerca de este tema, así como también del proceso llevado a cabo en esta monografía final de grado.

METODOLOGIA

Con el fin de abordar los objetivos planteados en la presente investigación, se utilizó metodología de carácter cualitativo entendiendo que la misma es la que mejor se adecua para el estudio de esta temática. Se entiende por metodología cualitativa el conjunto de técnicas que nos permiten diseñar un proyecto de investigación flexible pudiendo llegar a cambiar en el transcurso del mismo debido a las múltiples interpretaciones que surgen en el proceso de conocimiento del objeto de estudio. En este sentido, siguiendo lo expresado por Batthyány y Cabrera (2011), se trata de relevar datos de campo en el lugar donde los participantes viven el problema de estudio, en el contexto de acción de los mismos siendo el propio investigador el que recopila los datos: analizando documentos, entrevistando personas entre otras acciones.

“El proceso de investigación cualitativa es emergente. Esto significa que el plan inicial de investigación no puede ser prescrito rígidamente y que las fases del proceso pueden cambiar. Por ejemplo, las preguntas pueden cambiar, las formas de recogida de datos pueden modificarse, así como los individuos y el contexto de estudio.” (Batthyány y Cabrera, 2011, p. 78)

Como punto de partida se considera que la realidad es subjetiva y múltiple, por lo cual la metodología a utilizada pretendió tomar estos aspectos de la realidad produciendo los datos empíricos para luego ser analizados en base a los objetivos planteados. Siguiendo esta línea, Valles (1999) expresa:

“Para complementar esta aproximación al concepto de diseño cualitativo, conviene tomar buen apunte de la noción de decisiones de diseño. Diseñar significa, ante todo, tomar decisiones a lo largo de todo el proceso de investigación y sobre todas las fases o pasos que conlleva dicho proceso. Algunas de estas decisiones se tomarán al principio, mientras se va perfilando el problema a investigar y se delimitan los casos, el tiempo y el contexto del estudio. Otras irán surgiendo sobre la marcha. Lo importante es retener que se trata de cuestiones que deben trabajarse y resolverse en cada circunstancia concreta de investigación. El diseño no se estampa mediante un

molde o modelo que sirvió una vez, sino que se moldea cada vez a partir de los criterios maestros generadores de respuestas.” (Valles, 1999, p.78).

En este marco se utilizaron dos técnicas de investigación: la entrevista y el análisis de documentación. En cuanto a la primera,

“La entrevista es una conversación sistematizada que tiene por objeto obtener, recuperar y registrar las experiencias de vida guardadas en la memoria de la gente. Es una situación en la que, por medio del lenguaje, el entrevistado cuenta sus historias y el entrevistador pregunta acerca de sucesos, situaciones.” (Benadiba y Plotinsky citado en Sautu et al, 2005, p.48)

Se utilizó específicamente una pauta de entrevista semiestructurada dirigida por el investigador, entendiendo que la misma permite realizar modificaciones (agregar o quitar preguntas) en su transcurrir de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la conversación con el entrevistado y los intereses de conocimiento del investigador. De acuerdo a los objetivos planteados en esta monografía las personas a entrevistar fueron técnicos calificados que se desempeñan en la localidad de referencia.

Por un lado, se entrevistó a un perito social del Poder Judicial (entrevista A) con la finalidad de indagar acerca de las situaciones que ingresan al Juzgado de Colonia donde se presume vulneración de derechos de niños, recabar información de la intervención que realiza el Poder Judicial a partir del relato de un técnico del área social que se encuentra dentro de la institución y al mismo tiempo forma parte del proceso a estudiar. Por otra parte, la entrevista se efectuó a referente territorial del I.N.A.U.² (entrevista B) teniendo como fundamento conocer la percepción de un técnico que trabaja en territorio con familias que han tenido o son pasibles de tener una intervención judicial (denuncia mediante) por

²El Código de la Niñez y Adolescencia del Uruguay en su artículo n° 68 enuncia acerca del I.N.A.U. (ex Instituto Nacional del Menor) en cuanto a su competencia: “El Instituto Nacional del Menor es el órgano administrativo rector en materia de políticas de niñez y adolescencia, y competente en materia de promoción, protección y atención de los niños y adolescentes del país y, su vínculo familiar al que deberá proteger, promover y atender con todos los medios a su alcance. Deberá determinar, por intermedio de sus servicios especializados, la forma de llevar a cabo la implementación de las políticas a través de distintos programas, proyectos y modalidades de intervención social, públicos o privados, orientados al fortalecimiento de las familias integradas por niños y adolescentes y al fiel cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 12 y 19 de este Código.”

vulnerar los derechos de sus niños. Interesó en este sentido indagar acerca del proceso que lleva a una intervención judicial desde una órbita externa a dicha institución, así como también conocer acerca de las principales características observadas en el entorno familiar.

En lo que respecta a la técnica de análisis de documentación se tomó en cuenta material escrito que se encuentra elaborado y disponible con anterioridad a esta investigación, contribuyendo de este modo a conocer la perspectiva histórica del problema de estudio. Valles (1999) expresa que: “(...) en los estudios cualitativos cabe plantear un uso mínimo (o complementario) de documentos de todo tipo, incluso de fuentes estadísticas. Por ejemplo, para dar perspectiva histórica a un estudio contrastarlo con los datos cuantitativos existentes” (Valles, 1999, p.99). Para ello, se realizó la revisión de diferentes Códigos y leyes que están vinculadas al problema de estudio como, por ejemplo, Código del Niño y Adolescente del Uruguay, Convención de los Derechos del Niño, entre otros.

Cabe mencionar que las entrevistas realizadas, así como el análisis de documentación se enmarca en el espacio temporal actual tomando como referencia la información más actualizada disponible.

CAPITULO 1. Familia e Infancia: concepción histórica y estrategias de protección.

1.a Contextualización histórica de la protección a la infancia

Una de las categorías de análisis a abordar en esta monografía es la familia, partiendo de la premisa de que la misma es el ámbito más adecuado de protección y socialización primaria de la infancia. Para ello, es necesario analizar su concepción y los procesos que ha atravesado dando cuenta de su significado y su rol frente a la sociedad y el Estado así como también conocer al mismo tiempo cómo estos cambios han acompañado y definido la forma de concebir a la infancia.

En este sentido, de acuerdo a lo referido por Donzelot (1998), se destaca la posición neurálgica que ocupa la familia en las sociedades occidentales, posición que se valida por medio de la revisión e interrogación constante a la que es expuesta ante los más mínimos cambios que presenta. El autor anteriormente nombrado hace referencia, a la idea de que la familia se convirtió en el objeto fundamental para perpetuar el Antiguo Régimen en el siglo XIX garantizando un orden establecido que funcionara en torno a ella. Las formas de integración moderna de las familias son establecidas por sus propias transformaciones, de este modo no aparece como contrapuesta al orden social, sino como posibilidad de su emergencia.

“(…) la familia es una instancia en la que la heterogeneidad de las exigencias sociales puede ser reducida o funcionalizada, estableciendo una práctica que ponga en flotación las normas sociales y los valores familiares, y que cree al mismo tiempo una circularidad funcional entre lo social y lo económico.” (Donzelot, 1998, p.11)

Las transformaciones a nivel familiar y su readecuación al orden económico y social de la época, también fueron acompasadas por cambios paulatinos en la forma de concebir a la infancia comenzando un proceso de regulación hacia la misma a través de la familia. Según Donzelot (1998) las transformaciones que sufrió la familia y los cambios ideológicos y políticos en Francia asociados a esta, favorecieron que las asociaciones filantrópicas y

religiosas (a través de la asistencia mutua), comenzaran a intervenir sobre las personas de menores recursos, moralizando sus comportamientos y facilitando la educación con el objetivo de restaurar la vida familiar.

Según expresa el autor, uno de los primeros mecanismos fue promover el matrimonio en las clases más desfavorecidas de forma de garantizar que los adultos dejen su vida de promiscuidad para constituir una familia evitando de esta forma que los niños sean abandonados en hospicios. De igual forma, el autor menciona que en el marco de los cambios en la concepción de la familia e infancia se establece una intervención diferencial para los diversos estratos sociales. En el caso de la familia burguesa se da un modelo de *liberación protegida* basada principalmente en el resguardo sanitario, pero estimulando el desarrollo del niño a través de la psico pedagogía.

En el caso de las clases más descendidas, define al modelo como *libertad vigilada*, basado el mismo en prevenir el abandono y la situación de calle restringiendo los espacios de los niños hacia aquellos donde tuvieran una mayor vigilancia como la escuela y la familia. De acuerdo a esto, se infiere una contraposición en la forma de abordar las situaciones de la infancia de acuerdo a su origen socioeconómico asentando de esta forma una interpretación diferencial (y posterior intervención) sobre las situaciones de niños y niñas de la época.

Es en este contexto de legitimación y fortalecimiento de la familia nuclear como estrategia de reproducción del orden establecido que se comienza a exaltar la importancia de reglamentar la protección a la infancia:

“(…) si se quiere comprender el alcance estratégico de este movimiento de normalización de la relación adulto-niño, hay que tener muy claro que lo que se pretendía con esas medidas era de naturaleza indisociablemente sanitaria y política; que con ellas se trataba, sin duda, de satisfacer el estado de abandono en el que se encontraban los niños de las clases trabajadoras, pero también de reducir la capacidad socio-política de estas, rompiendo los lazos iniciáticos adulto-niño, la transmisión autárquica de habilidades, la libertad de movimientos y de agitación que

resultaba del relajamiento de las antiguas obligaciones comunitarias.” (Donzelot, 1998, p.80)

Según lo referido por el autor, a través de la creación de nuevas leyes (sobre el trabajo de los niños, insalubridad de viviendas, contrato de aprendizaje, vigilancia de nodrizas, escuela obligatoria, etc.), se sucede una progresiva transferencia de soberanía desde la familia hacia aquellos que poseen un status más técnico como magistrados, médicos, filántropos. A pesar de ello, existía resistencia de aquellos padres que, aunque hayan sido simplemente negligentes o débiles en la vigilancia de sus hijos (ocasionando el vagabundeo), se oponían a la asistencia caritativa. De acuerdo a ello, surge la necesidad de delegar el poder de decisión sobre las familias,

“De ahí la ley de 1898, que otorga al juez el poder de confiar la vigilancia de un niño, bien a la asistencia pública, a una persona o a una sociedad caritativa, y esto en todos los casos de delitos o crímenes cometidos por niños o sobre niños.” (Donzelot, 1998, p.85)

De este modo, se determina un antecedente en Francia de la función asignada al poder estatal en lo que respecta a la intervención en aquellas situaciones que involucran a niños.

De igual forma, Costa y Gagliano (2000) refieren que, la intervención del Estado moderno sobre la infancia estuvo signada por el control y el disciplinamiento hacia los niños. Sobre todo, hacia aquellos niños que no reunían los requisitos de una familia formal, de acuerdo al modelo social establecido, principalmente aquellos provenientes de sectores populares. “El sistema tutelar garantizaba el rescate de estos niños y los ingresaba en circuitos paralelos de socialización que confluían en el imaginario conservador de un pueblo de menores” (Costa y Gagliano, 2000, p.73).

Donzelot (1998) expone que bajo el Antiguo Régimen la familia se identifica como sujeto y objeto de gobierno. Como sujeto en la medida que internamente se establecen relaciones de poder entre sus integrantes teniendo como líder al jefe de familia, quien al mismo tiempo se ubica en relación de dependencia con otros grupos de pertenencia que se

enmarcan dentro de otros grupos sociales más amplios configurando la mínima organización política posible. De esta forma el jefe de familia es quien debe asegurar que los miembros de su familia se adhieran al orden público a cambio de protección y reconocimiento de su status. En este sentido, la no pertenencia a una familia presupone un problema de orden público.

De acuerdo a lo que explicita Cortés (2012), el sistema tutelar surge a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX como una forma de intervención del Estado ante la notoria preocupación pública por los niños. Se entiende que el modelo imperante hasta ese entonces donde los niños se encontraban subsumidos en la estructura familiar bajo el poder y obediencia del padre de familia comenzaba a desmoronarse.

“El estado empieza a enfrentar los aspectos infanto-adolescentes de la “cuestión social”. Mientras el espíritu propio del primer modelo consistía en entregar el cuidado y disciplinamiento de los hijos a sus padres, dentro de una esfera de autonomía del pater familias que el Estado debía respetar y promover, las legislaciones tutelares compensan dicha tendencia saltando hacia el extremo contrario: el Estado debe intervenir autoritariamente en relación a niños/as que no son adecuadamente socializados en sus familias o contextos de origen.” (Cortés en Morás, 2012, p.41)

En lo referente a los cambios que ha atravesado la infancia en los últimos años es necesario explicitar los procesos que tuvieron lugar en Uruguay los cuales han dado inicio a una serie de transformaciones paulatinas de la intervención del Estado y de la sociedad hacia esta población. Estos procesos se encuentran ligados también y forman parte de otros más globales como los expuestos anteriormente estando vinculados al rol que cumple el Estado en cada momento histórico.

Como fuera expresado en la presentación de este documento, en lo que respecta a la situación de la infancia en Uruguay se mencionan dos grandes paradigmas que marcaron la forma de concebirla los cuales fijaron las estrategias de intervención hacia la misma. En un primer momento, surgió el modelo de enfoque tutelar denominado paradigma de la

Situación Irregular pasándose luego al paradigma de la Protección Integral siendo este el vigente en la actualidad.

Según lo expresado por De Martino (2011) la configuración del actual Estado uruguayo tiene sus bases en el modelo político económico implementado por el batllismo a inicios del siglo XX, conformándose como un estado benefactor desarrollando políticas de protección a la infancia en el marco de un temprano sistema de protección social.

Al decir de Barrán (1992), en las primeras décadas del siglo XX aparece en Uruguay una nueva sensibilidad manifestándose a través de: sentimientos, valores y conductas diferentes a las que se presentaban hasta ese momento imponiendo disciplina a la sociedad en lo que respecta al cuerpo, sexualidad, ocio, invalidando además el castigo hacia los niños, delincuentes y trabajadores (costumbre instaurada hasta ese entonces) dando lugar a la represión del alma como forma de disciplinamiento.

Esta nueva sensibilidad “civilizada” como la denomina el autor, impacta directamente en la forma de concebir a la infancia principalmente en lo que respecta al reconocimiento del niño en su singularidad, en

“La época bárbara (...) el niño era considerado un hombre pequeño, y de ahí, en parte, el uso del castigo corporal como pena y correctivo de todos, niños, adolescentes y hombres. (...) La época civilizada cambiará todos estos supuestos culturales. El niño será visto como un ser diferente, con derechos y deberes propios de su edad (...)” (Barrán, 1992, p.101)

Al mismo tiempo, según expresa el autor, el Estado también comienza a contemplar al niño creando diferentes instituciones para su atención, como, por ejemplo, a través de la creación del Asilo maternal diurno (para niños de 2 a 8 años), también en 1892 se inauguró el primer Jardín de Infantes y la primera Clínica de Niños de la Facultad de Medicina.

Este interés del Estado en intervenir en los problemas sociales de aquella época (particularmente en aquellos asociados a la infancia), promueve que en el año 1934 se apruebe el Código del Niño enmarcado en el Derecho de Familia.

“Junto al Código del Niño, se aprueba una reforma de la Constitución. Ambos marcos jurídicos plasman una concepción natural de la familia, como célula básica de la sociedad, y del niño, como objeto de necesidades. La familia y el niño pasan a ser objeto de protección y control por parte del Estado desde una perspectiva de higiene pública. Los estratos sociales pobres son el foco poblacional privilegiado de atención estatal, registrándose una identificación entre pobreza, peligrosidad y enfermedad.” (De Martino, 2011, p.19)

La autora define que este modo de concebir las políticas públicas dirigidas hacia la infancia con el objetivo de resolver los “desvíos” que se alejan de lo “normal” se asienta sobre el paradigma jurídico de la situación irregular.

Siguiendo lo expresado, Portillo (1989) relata cómo antecedentes de la intervención estatal que culmina con la aprobación del Código del año 1934, los grandes cambios que comenzó a tener la sociedad uruguaya especialmente en Montevideo donde aumentaron de forma considerable los movimientos inmigratorios regionales e internacionales, cambiando también las estructuras familiares. De acuerdo a lo manifestado por el autor, se comienza a visualizar el pasaje de familias mayoritariamente extensas a familias nucleares, instaurándose nuevos fenómenos de anomia social problemas sociales entre los que surge la desprotección de un número creciente de “menores” abandonados.

Esta situación a su decir, va a acelerar la intervención del Estado esta realidad social en vista que de la sociedad civil tenía cada vez más dificultades para absorber la protección social al menor. “De manera categórica, se plantea apoyar al núcleo familiar para hacer posible sus cometidos reproductores. Cuando ello no es posible porque este no existe, se trata de reproducir institucionalmente ese hogar inexistente (...)” (Portillo, 1989, p.21). En lo que respecta a lo expuesto anteriormente, la intervención sobre la infancia con el Código de 1934 se centró sobre los desvíos de carácter higienista.

Portillo (1989) recoge en su texto la importancia y hegemonía que adquirió el saber médico en cuanto a la formulación de una propuesta global de atención y encausamiento de los menores definida principalmente en nuevas prácticas en su mayoría de tipo profiláctico. Del mismo modo, el autor hace mención a la inserción del niño en el sistema educativo

formal (enseñanza primaria) como otra de las estrategias centrales del modelo instaurando un control a nivel familiar a efectos del cumplimiento del precepto educativo.

“La construcción social de la infancia fue un proceso que permitió identificarla y considerar a niños y niñas como sujetos diferentes y, por tanto, reconocerle una existencia que debía ser pensada. Es así que el siglo XVIII y XIX contienen discursos sobre la infancia vinculados con la salud, la educación, el futuro de la sociedad, el trabajo y la familia.” (De Martino, 2011, p.23)

Como fuera expuesto, el Código de 1934 se asienta sobre un paradigma de carácter tutelar que más que nada pretendía subsanar aquellas cuestiones relativas a la infancia a través del control y la vigilancia del niño.

De acuerdo a lo expresado por Iglesias (2000):

“Los cambios operados en el contexto socioeconómico e ideológico a nivel internacional, -que en América Latina supusieron el ajuste estructural, los gobiernos dictatoriales y la nueva modernización de los años 70 en adelante-, en el campo específico de los sistemas de protección de la infancia tomaron la bandera de las debilidades de estas instituciones, y del Estado en general, para ahora sí promover su transformación.” (Iglesias, 2000, p13)

En palabras de la autora, a partir de los años 70 y durante las siguientes décadas, todo lo relativo a la infancia tomó gran relevancia en el campo de los Derechos Humanos. Este movimiento promueve en el año 1989 la aprobación y ratificación por parte de todos los Estados latinoamericanos de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños y Adolescentes generando grandes contradicciones en el seno de los Estados y particularmente, de los sistemas de protección. Estas contradicciones según Iglesias (2000), se dan en cuanto a que si bien se hizo un esfuerzo real por modificar la legislación en lo que respecta a los derechos de los niños (incluyendo capacitación, revisión de políticas, acompañamiento de medios de comunicación) la gestión del nuevo paradigma tuvo fuertes críticas entendiendo lo arraigada que estaba la concepción anterior generando que tanto los métodos, discursos y prácticas se acompañaran lentamente al nuevo modelo vigente.

En 1990 Uruguay ratifica la C.D.N. (casi un año después de su aprobación), lo cual implicó en ese momento un desafío en cuanto a la obligación de modificar no solo los instrumentos jurídicos (leyes, códigos, etc.) existentes sino también cambiar rotundamente el paradigma de cómo era concebida la infancia y la adolescencia hasta ese entonces debiéndose traspasar todos los instrumentos de intervención, protección y concepción sobre la misma existentes en nuestro país asumiendo además la consecuente modificación y creación de nuevos mecanismos.

“La Convención marca una ruptura filosófica y jurídica trascendental con las tradiciones tutelares y paternalistas de la infancia (...) constituye principalmente un punto de inflexión más que significativo, para el desarrollo del nuevo paradigma de la protección integral sobre los derechos de la niñez.” (López et al, 2008, p.37)

De acuerdo a lo expresado por Cortes (2012) la Convención concibe al niño como un sujeto de derecho trasladando dicha condición a todos los ámbitos donde este se desenvuelve (familia, barrio, escuela) reconociendo al mismo tiempo deberes correlativos para con estos de la familia, la sociedad y el Estado.

Este proceso de modificación e instauración en Uruguay del nuevo paradigma culmina con la modificación del Código de la Niñez de 1934 dando lugar al nuevo C.N.A. aprobado el 07 de setiembre del año 2004 mediante la Ley N° 17.823. De esta forma, 14 años después de la ratificación de la C.D.N. el Estado uruguayo plasma a nivel normativo su adecuación al nuevo paradigma de la protección integral recogido por la misma.

Según Iglesias (2000) fue un arduo proceso:

“Los nuevos códigos de la infancia y adolescencia, salvo excepciones, recorrieron un largo camino de marchas y contramarchas. Muchos de los anteproyectos fueron remiendos de los viejos códigos que aggiornaban y las sombras del "menor irregular" seguían presentes. El quiebre con una concepción tan arraigada como fue la creación de tribunales de menores, de códigos de menores para sólo un sector de la población infantil, el único que hacía uso de estas figuras, no pudo efectuarse en una década.” (Iglesias, 2000, p.13)

Lo descrito hasta ahora, en lo que respecta a las diferentes concepciones históricas acerca de la infancia y la familia denota su intrínseca relación con el modelo social y económico correspondiente a cada época. De acuerdo a ello, la relación entre familia, infancia e intervención estatal cambia sugerentemente ante el modelo imperante pasando de una fuerte y directa intervención estatal en lo que respecta a la infancia a un modelo donde se le devuelve a la familia la responsabilidad primaria de su reproducción.

Siguiendo el pensamiento de González y Leopold (2011), con la C.D.N. y el C.N.A. orientados en la doctrina de la protección integral, se identifica a la familia como el mejor lugar para la efectiva protección de los derechos de niños y adolescentes siendo el último recurso la separación de los mismos de su familia de origen. De esta forma, se configura “un nuevo escenario que «devuelve» a la familia, cuestionada en el desempeño de sus funciones de protección y cuidado, la responsabilidad de su propia reproducción.” (González y Leopold, 2011, p.77)

Ante esta situación, es importante analizar qué sucede con aquellas familias que no pueden dar la respuesta esperada debido a consecuencias propias del modelo político económico actual (desempleo, problemas de vivienda, dificultades en acceso a educación y sistema de salud, etc.) que lejos de ser un problema individual se enmarca en una realidad compartida por varias familias que se encuentran en la misma situación y que lógicamente impacta en las capacidades de cuidado hacia la infancia. Para ello, es necesario tener presente algunas de las principales características de las familias y cómo se conciben dentro del modelo actual.

1.b Infancia y familia en el Uruguay de hoy.

Jelin (2007) describe a la familia como una institución social anclada en necesidades humanas universales de bases biológicas (sexualidad, reproducción y subsistencia cotidiana) donde sus miembros comparten un espacio social con relaciones de parentesco, conyugalidad y pater/maternalidad.

“La familia nunca es una institución aislada, sino que es parte orgánica de procesos sociales más amplios, que incluyen las dimensiones productivas y reproductivas de la

sociedad, los patrones culturales y los sistemas políticos. Los hogares y las organizaciones familiares se relacionan con el mercado de trabajo y la organización de redes sociales (...) son parte de procesos sociales y culturales más amplios y están también sujetos a políticas públicas. Como institución social básica, la familia no puede estar ajena a valores culturales y a los procesos políticos de cada momento o periodo histórico.” (Jelin en Arriagada, 2007, p.96)

En lo que respecta a las composiciones familiares actuales, es importante resaltar las principales características de las mismas y cómo se han venido conformando en los últimos años. Para ello, hay que tener en cuenta que según lo expresado por Jelin (2007) las reformas económicas neoliberales han ocasionado en la mayoría de los países de América Latina situaciones de crisis y no crecimiento con el consiguiente deterioro del mercado de trabajo (aumentando el desempleo y la precarización). Tal situación incrementó los niveles de pobreza y desigualdad en el ingreso monetario que no parece estar en vías de revertirse.

En esta línea, basándonos en el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) correspondiente a la Encuesta Continua de Hogares realizada en el año 2014³ en Uruguay, podemos afirmar que la cantidad de menores de 0 a 11 años representa el 16,8 % de la población total. En lo que respecta a la pobreza e ingresos, el 49,2 % de los niños/as del país, residen en hogares cuyo ingreso se encuentra en el primer quintil de ingresos. Es decir, casi la mitad de los niños que tienen entre 0 y 11 años se encuentran en los hogares con menores recursos económicos y materiales. Para la totalidad de los hogares del país la pobreza alcanza 6,4%, mientras que este porcentaje aumenta al 14,7 % entre los hogares donde residen niños menores de 12 años.

Es importante señalar que no solo es mayor la incidencia de la pobreza en los hogares donde residen niños de 0 a 11 años de edad, sino que ésta aumenta a medida que aumenta también la cantidad de menores en el hogar. Mientras que la pobreza es del 9,5 % entre los hogares con un único niño, en los hogares con tres o más niños es del 37,8 %. Teniendo presente las estadísticas anteriormente mencionadas, es pertinente citar los aportes de Terra quien considera que:

³ Extraído de <http://www.ine.gub.uy/web/guest/encuesta-continua-de-hogares> (acceso 22/01/2019)

“La pobreza infantil, en una primera aproximación, habla y nos remite a la pobreza del mundo adulto. Nos habla de la no accesibilidad al y la no participación en, respecto del conjunto heterogéneo de recursos históricamente disponibles en una sociedad concreta. Se trata del conjunto que puede satisfacer y realizar las necesidades, así como efectivizar derechos adscriptos a la condición de ciudadanas y ciudadanos, de seres humanos. (...) En las niñas y niños esta chance está mediada por la posición y situación de sus adultos referentes pues, ellos/as son seres dependientes, seres con derecho a respeto, protección, cuidado, asistencia y promoción.” (Terra en Serna, 2010, p.156)

En este sentido, Terra (2010) destaca que, en la sociedad actual niñas, niños y adolescentes corren suertes distintas dependiendo de la condición social y económica de la familia y del número de menores que la integran. Frente a esto la infantilización se presenta como una manifestación del desamparo creado por la modalidad de vida en sociedad, de las condiciones a que están sometidas las familias de los sectores a que pertenecen estos niños y niñas, pero también del tipo de pobreza de una sociedad.

En consonancia con lo detallado anteriormente, según Jelin (2007), a partir de la década del 90 se constatan cambios importantes en los procesos de formación de las familias entre los que resaltan: la nupcialidad en descenso, el aumento de las uniones consensuales y la cohabitación, en sectores rurales y pobres muchas veces con iniciación sexual temprana y embarazos adolescentes que tienden a reproducir patrones de responsabilidad materna hacia los hijos y escasa responsabilidad paterna. Al mismo tiempo, familias ensambladas con hijos/as que conviven y comparten actividades familiares sin ser hermanos o con abuelos y abuelas que no lo son en términos legales o biológicos ante lo cual se debería “establecer algunos parámetros que permitan incorporar a estos vínculos como posibles depositarios de responsabilidades cuando se trata de proteger y contener a personas que lo necesitan.” (Jelin en Arriagada, 2007, p.104).

Por otro lado, en lo que respecta a la evolución de las diversas estructuras familiares según los tipos de hogares, Arriagada (2007) agrega que entre 1990 y 2005 las familias nucleares si bien continúan predominando se produce una reducción de las mismas debido

al incremento de los hogares no familiares. Al mismo tiempo, disminuyen las familias nucleares biparentales con hijos explicado en parte por su transformación en familias monoparentales con hijos principalmente de jefatura femenina.

“Por largo tiempo, la familia nuclear con presencia de un padre proveedor, una madre ama de casa e hijos, fue considerada - y aún lo es - el paradigma de familia ideal y el modelo familiar sobre el que se planifican las políticas públicas. Hacia 2005, se observa que ese modelo de familia nuclear tradicional no era mayoritario en la región latinoamericana.” (Arriagada, 2007, p.129)

De acuerdo a los datos publicados del último informe elaborado por el I.N.E. correspondiente a la Encuesta Continua de Hogares realizada en 2014⁴, los hogares donde residen niños entre 0 y 11 años son en un 65% hogares nucleares integrado por ambos cónyuges con sus hijos. Por otro lado, el 12,7 % lo ocupan los hogares monoparentales entendido este como aquel núcleo donde los hijos residen con uno solo de los progenitores. Al realizar la apertura por quintiles de ingresos se observa que la proporción de hogares monoparentales aumenta su presencia a medida que disminuyen los ingresos. Por el contrario, los hogares nucleares con hijos son ampliamente mayoritarios en los quintiles de mayores ingresos (85,0 %). Es de destacar que los hogares clasificados como extendidos (completos o incompletos) conforman el 19,5 % de los hogares donde hay niños menores de 12 años.

En términos generales, según los datos presentados provenientes de la Encuesta Continua de Hogares realizada en el año 2014, casi la mitad de la población de niños del país reside en hogares de bajos ingresos sumado a que cuanto mayor es la cantidad de niños en el núcleo familiar mayor es la incidencia de la pobreza. Por otro lado, teniendo en cuenta las múltiples conformaciones familiares se destaca que el 85% de los hogares nucleares (con los dos padres) se encuentran en los hogares con mayores ingresos mientras que los hogares monoparentales en su mayoría se encuentran en los de menores ingresos. En este sentido, la conformación familiar y económica del hogar ya está dando la pauta de una desigualdad por lo que seguramente la forma de gestionar y reproducir socialmente a sus

⁴ Extraído de <http://www.ine.gub.uy/web/guest/encuesta-continua-de-hogares> (acceso 22/01/2019)

miembros también sea desigual en cada núcleo familiar. Es decir, las capacidades de gestión y reproducción no van a ser las mismas en un hogar con los dos padres, hijos e ingresos aceptables que la de un núcleo con un solo padre, varios hijos y bajos ingresos.

Si consideramos el papel fundamental y la responsabilidad asignada a la familia en lo que respecta a la protección de los derechos de la infancia se debe tener presente la desigualdad y diferenciación entre las clases existentes entendiendo que se visualiza una desigualdad en la forma en que los miembros de una familia atienden y resuelven su vida cotidiana accionando de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, sin embargo, son interpeladas socialmente a desenvolverse de la misma forma.

Según González y Leopold (2011):

“Partir de la conceptualización que supone que todos los individuos tienen intrínsecamente la misma posibilidad de hacerse cargo de decisiones adoptadas libremente, aun en contextos de pobreza y exclusión social, como si esta situación no condicionara seriamente sus opciones de vida, sería caer en la ingenuidad de ignorar la producción social de las desigualdades en un sistema de clases.” (González y Leopold, 2011, p. 31)

En este marco, De Martino (2011) expresa que pese al protagonismo que han tenido las familias en la conjunción de nuevas políticas sociales, no se han contemplado sus transformaciones en sus modos actuales de vida. La política pública continúa incorporando sus dimensiones tradicionales como ser: familia nuclear, patriarcal, unidad residencial estable, roles definidos de género y demás. En la misma línea:

“Más allá de los aspectos institucionales y las prácticas de la vida familiar existen valores sociales e ideologías expresadas en las imágenes de la familia “normal” o incluso “natural”. Al naturalizar a un cierto tipo de familia, otros tipos son estigmatizados, y quienes promueven mayores posibilidades de elección en cuanto a patrones de convivencia (...) pueden ser vistos como anormales, subversivos o aun como el mismo diablo.” (Jelin en Arriagada, 2007, p.96)

CAPITULO 2. Intervención judicial: descripción del proceso y reflexiones acerca de su impacto en los niños y las familias.

En el presente capítulo se describirá el proceso de intervención judicial ante las situaciones de denuncia, de amenaza o vulneración de derechos de la infancia analizando el impacto que la misma genera en la situación abordada y la familia. Para ello, es necesario explicitar que Uruguay al ser un estado de derecho tiene en su reglamentación establecido cómo se debe proceder ante estos casos. En este sentido, el punto de partida son los artículos 117 y 118 del C.N.A. los cuales detallan:

“(Principio general) Siempre que los derechos reconocidos a los niños y adolescentes en este Código sean amenazados o vulnerados, se aplicarán las medidas que dispone este título. De igual forma se aplicarán a los niños que vulneren derechos de terceros.” (C.N.A. Art. 117)

“(Primeras diligencias) El juez que tiene conocimiento, por cualquier medio, que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo anterior, tomará las más urgentes o imprescindibles medidas, debiéndose proceder a continuación conforme lo estatuye el artículo 321 del código general del proceso⁵.” (C.N.A. Art. 118)

Como fuera mencionado brevemente en la introducción de este trabajo, el lugar donde se dirimen los conflictos que involucran a niños y adolescentes en el Departamento de Colonia es el Juzgado de Familia entendiendo “(...) en primera instancia, en las cuestiones atinentes al nombre, estado civil y capacidad de las personas y a las relaciones personales y patrimoniales entre los miembros de la familia legítima y natural fundadas en

⁵Código General del Proceso aprobado/a por: Ley N° 15.982 de 18/10/1988. Art. 321 detalla: Incidente fuera de audiencia. - 321.1 La demanda incidental se planteará por escrito, dándose un traslado por seis días que se notificará a domicilio. 321.2 Tanto con la demanda como con la contestación, si se tratare de una cuestión que requiera prueba, las partes la acompañarán conforme con lo dispuesto por el artículo 118. Contestado el traslado o vencido el término, el tribunal ordenará el diligenciamiento de la prueba si correspondiere y convocará a audiencia, la que se desarrollará de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1) y 4) del artículo 346, en lo pertinente. Podrá rescindirse de la audiencia cuando se tratare de asuntos depuro derecho. La incomparecencia de las partes a la audiencia determinará la aplicación del artículo 340.

su calidad de tales”⁶. Estas cuestiones tienen que ver por ejemplo con: aspectos vinculados a filiación legítima y natural y de posesión de estado civil, las acciones referentes al matrimonio y a la situación de los cónyuges, las pensiones alimenticias y régimen de visitas, la guarda, tutela, administración de los peculios de los hijos, suspensión, limitación, pérdida y restitución de la patria potestad, adopción y legitimación adoptiva (entre otros). Además de ello, se le agrega competencia en los “procedimientos a que den lugar las situaciones de menores materialmente abandonados”.⁷ En este sentido, la entrevistada A, considera que es una característica de los Juzgados del interior del país, la inexistencia de una especialización en vulneración de derechos de niños y adolescentes siendo por tal motivo los Juzgados multimateria. A su entender, el Juez tiene que intervenir en todas las situaciones de familia, ratificación de tenencia, divorcio, laboral, civil, violencia de género, etc. presentándose esto como una gran debilidad debido a la ausencia de conocimiento en profundidad de determinadas situaciones ocurridas en relación a esta área.

En relación con lo anteriormente expuesto, es importante tener en cuenta, que el Código por el cual se rigen las situaciones de niños, niñas y adolescentes (C.N.A.) fue aprobado en el año 2004 por lo que existe una gran cantidad de profesionales Doctores en Derecho (quienes se desempeñan como Jueces, fiscales, abogados defensores) que no contaron con la formación académica curricular en dicha materia quedando a consideración del profesional la incorporación de esta área de conocimiento mediante cursos, seminarios, etc. luego de la obtención del título de grado.

Al mismo tiempo, según afirma una de las entrevistadas, en el ámbito del Juzgado de Familia de Colonia, cuando se actúa en una situación de vulneración de derechos hacia los niños intervienen diversos profesionales como ser: abogados (Juez, fiscal en representación del Ministerio Público, defensores públicos o particulares) profesionales pertenecientes al Instituto Técnico Forense (de ahora en adelante I.T.F.) constituido por ejemplo trabajador social, psiquiatra infantil, psicólogo, médico forense así como también administrativos judiciales.

⁶Disponible en www.poderjudicial.gub.uy (acceso 30/04/2019)

⁷Disponible en www.poderjudicial.gub.uy (acceso 30/04/2019)

Es importante destacar el papel que cumplen los profesionales que integran el I.T.F. quienes cuentan con la especificidad en su materia para poder profundizar en el análisis de la situación a intervenir a través de la elaboración de un informe que luego es presentado al Juez actuante. En este sentido, se resalta que la intervención del I.T.F es a discreción del Juez si este considera que alguno de los profesionales puede aportar al análisis, esclarecimiento y/o comprensión de la situación intervenida. La entrevistada A destaca que:

“(…) los equipos técnicos del Poder Judicial en el interior del país son relativamente nuevos, se crearon en principio para la aplicación de la Ley 17.514, la primera Ley de Violencia Doméstica. (...) en ese sentido el Juez si quiere puede escuchar la opinión de otros profesionales más formados en esos aspectos.”
(Entrevista A)

Como punto de partida, el proceso judicial de atención a una situación donde se constata o sospecha que existe vulneración de derechos hacia un niño, inicia a través de la formalización de una denuncia por parte de un particular ya sea a través de la Seccional Policial o mediante elevación de informe técnico de instituciones que tengan o hayan tenido contacto con la situación, por ejemplo: centros educativos, centros de salud, equipos de trabajo comunitarios o de territorio, etc.

Las entrevistadas manifiestan que los principales motivos de denuncia en aquellas situaciones que involucran a niños tienen que ver con cuestiones vinculadas a la violencia doméstica entre adultos siendo los niños víctimas indirectas, temas relacionados al ámbito de salud como es negligencia o presunción de maltrato o abuso sexual, desvinculación educativa y falta de cuidados por parte de los referentes adultos.

Dependiendo las características de la misma, el Juez actuante dispondrá las acciones a seguir en el sentido de que puede llamar a audiencia de forma inmediata o solicitar informes periciales o a otras instituciones con el objetivo de recabar más información antes de fijar audiencia. Establecida la misma deberán comparecer en primera instancia los padres o tutores legales del niño para dar cuenta, responder y explicar acerca de la situación denunciada debiendo presentar para ello pruebas concretas que refuten la misma. En ese

momento se activa el mecanismo judicial de intervención directa sobre la familia determinando que:

“(…) el modo de comparecer implica la inserción del niño y la de su familia en un medio de notables, de técnicos sociales y de magistrados. Imagen de cerco, puesto que establece una comunicación directa entre los imperativos sociales y los comportamientos familiares, sancionando, en detrimento de la familia, una relación de fuerza.” (Donzelot, 1998, p.7)

De acuerdo a lo descrito por la entrevistada A, en lo que respecta a los procesos del Juzgado de Colonia, se entiende que cuando llega una situación, la Jueza o el Juez, pasa el expediente a la Oficina Judicial indicando las acciones a seguir. La Sede Judicial ingresa al Sistema Nacional de Pericia siendo dirigida luego a la unidad ITF Colonia donde se asignan a los peritos para realizar pericias diagnósticas o evaluaciones de riesgo. Las pericias solicitadas por el Juez según considere apropiado pueden ser: social, psicológica o psiquiátrica. Al mismo tiempo, los peritos pueden sugerir también otras pericias u otros informes.

Una vez valorada y evaluada la situación por el Juez actuante, se determinará la medida a aplicar, que según lo estipulado en el artículo N° 119 del C.N.A. pueden ser:

- A) “Llamada de atención para corregir o evitar la amenaza o violación de los derechos de los hijos a su cuidado, y exigir el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en la protección de los derechos afectados.
- B) Orientación, apoyo y seguimiento temporario socio-familiar prestado por programas públicos o privados reconocidos.
- C) Obligación de inscribir al niño o adolescente en un centro de enseñanza o programas educativos o de capacitación y observar su asistencia y aprendizaje.
- D) Derivación a un programa público o privado de protección a la familia.” (C.N.A. Art. 119)

A partir de dicha intervención y más allá de la resolución final que determine el juez interesa a los efectos de la presente monografía reflexionar acerca de la incidencia que tiene

el propio proceso judicial y su impacto en las personas que intervienen y que son expuestos al mismo, a entender, niños, niñas y adultos referentes.

En primer lugar, como primer acercamiento al análisis a desarrollar cabe expresar lo que según Mijalofsky y Salerno (2005) constituye una de las características de todo proceso judicial:

“Detrás de toda caratula y en cada una de las hojas de un expediente judicial independientemente si la misma hace referencia a un individuo o su situación de posible desvalimiento, a dos o más individuos involucrados en un conflicto, siempre existe una familia en situación de crisis que no ha podido resolver dentro de sus fronteras esa situación.” (Mijalofsky y Salerno, 2005, p. 75)

En este sentido, es apropiado mencionar los aportes que realizan González y Leopold (2011) en su investigación acerca de prácticas diagnósticas de niños y adolescentes en el ámbito socio –judicial:

“Al pasar al ámbito de la justicia, la familia pierde el control de la situación que atraviesa, para verse, más tarde, reflejada en una decisión ajena sobre el conflicto que fuera expuesto al arbitraje público. Si bien una mirada distinta de terceros no implicados en un episodio que genera desazón en los miembros de la familia, podría enriquecer la instancia de elaboración del conflicto mediante un espacio en la que los sujetos pudieran «ver» de forma distanciada sus propias dificultades, la forma de «resolución» que se produce en el ámbito judicial no aporta una mirada crítica sobre la situación con posibilidades de discusión para los participantes.” (González y Leopold, 2011, p.53)

Siguiendo esta línea, la entrevistada B sostiene que la intervención del Juez en la situación familiar no genera un pensamiento acerca del problema, sino que se trata de una cuestión de orden, de autoridad. A su entender, el mandato del Juez determina que la persona “tenga que” actuar de determinada manera pero muchas veces no se genera en la misma la internalización de que debe hacerlo porque en realidad puede resultar positivo para su núcleo familiar, o la situación que se presenta como problemática. La entrevistada

reconoce que cuando les son derivadas situaciones donde se denuncia que existe vulneración, en general se tiende a evitar la intervención judicial pero muchas veces esta es necesaria porque ya existe un trabajo previo con la familia quienes no realizaron modificación alguna de la situación. En esos casos que además se constata que existe vulneración de derechos hacia un niño, se recurre a la judicialización: "...cuando ya trabajaste un montón de cosas y ves que realmente existe vulneración, entonces tenes que proteger al niño." (Entrevista B)

La intervención judicial implica una intervención puntual y directa que resuelve el conflicto en detrimento de una de las partes. Según Mijalofsky y Salerno (2005) el encuadre realizado implica tácitamente la idea de ganador-perdedor la cual a su entender es inadecuada cuando se trata de cuestiones de familia que implican aspectos afectivos y de identidad. "Más allá de quien pueda aparecer como ganador de la contienda, sobresalen los niños como perdedores, e inclusive el supuesto ganador ha debido tolerar un monto altísimo de deterioro y sufrimiento." (Mijalofsky y Salerno, 2005, p.75)

La intervención judicial de acuerdo a lo expresado por Costa y Gagliano (2000) da lugar a una identificación del niño mediante legajos, historias clínicas, "sujetos" de programas y las derivaciones que se realizan en las prácticas institucionales que modifican la concepción de "niño" lo que impacta de manera profunda en la conformación de su identidad generando que aun culminada la situación que dio lugar a una intervención judicial continúen vinculados a los procesos que tuvieron lugar a consecuencia de la misma:

"Rige un proceso de minorización y este no solamente compete a una etapa de la vida, es decir, no concluye con la mayoría de edad como se ordena en lo jurídico, sino que dejan marcas tan estructurales que aquellos que han transitado ese camino continúan en él más tarde o más temprano a través de diferentes dispositivos institucionales". (Costa y Gagliano, 2000, p.85)

Cabe agregar que sumado al proceso de minorización al que refieren los autores, la entrevistada B sostiene que en la instancia judicial no se contemplan determinados aspectos que hacen al entendimiento de la situación, por ejemplo: las historias familiares, las

características particulares, el entorno de la familia, las posibilidades que tienen de cambio, lo que genera más tarde que esas situaciones vuelvan nuevamente al sistema. Para la entrevistada el retorno está signado porque lo que se determina en la audiencia, responde a mandatos, a normas y se tiene una expectativa de cambio a corto plazo que muchas veces no es posible de concretar.

Como fuera mencionado en el capítulo anterior, desde el punto de vista de la familia, es en los sectores de menores ingresos donde la mayoría de las veces se suma una situación de vulnerabilidad que no tiene que ver con lo individual o la situación particular que viven. De acuerdo a lo expresado por Terra:

“Si hablamos de niñas y niños en situación de indigencia o de pobreza, el fenómeno involucra muy especialmente a la sociedad desde que la pobreza no es un fenómeno o situación individual o familiar, sino un proceso societal cuya manifestación más evidente son las condiciones de vida de sectores más afectados por su ordenamiento y procesos.” (Terra en Serna, 2010, p.157)

En este sentido, las entrevistadas concuerdan en que una de las características en común de la mayoría de las familias que ingresan al sistema judicial en del departamento de Colonia es que se encuentran en situación de exclusión social y pobreza extrema y muchas veces con historias personales de vulneración de derechos también.

“Una característica en común es que son familias en situación de exclusión social y pobreza extrema. Pero no quiere decir que esos problemas solo se vean en esas familias. Mayormente se denuncian y son más visibles estas situaciones cuando están en estas familias, se denuncia más pero no quiere decir que en otras familias de otra condición socioeconómica no se den. No está en el imaginario social o en esas mismas familias no está establecido, no está legitimado que haya vulneración de derechos.” (Entrevista A).

La entrevistada A, sostiene que la mayoría de los expedientes que le son derivados corresponden a situaciones donde existe exclusión sociocultural, niveles de ingreso bajos y nivel educativo de los padres descendido.

Ante estas situaciones nos encontramos con adultos socialmente frágiles que no siempre cuentan con las herramientas internas y externas para poder ser garantes de que sus niños no vean sus derechos amenazados. Sin embargo, muchas veces son juzgados en su incumplimiento sin tener en cuenta los mecanismos o procesos que los llevaron a dicha situación, realizando un análisis segmentado de su realidad.

Siguiendo esta línea, el C.N.A. en su Artículo 7 recoge la corresponsabilidad del Estado en garantizar políticas generales orientadas a la infancia, la adolescencia y a la familia con el fin de garantizar la efectiva protección de los derechos de los niños y adolescentes. Sin embargo, en el sistema judicial, al momento de valorar si existen derechos vulnerados se interpela a la familia adjudicándose a esta el cien por ciento de la responsabilidad. “Bajo la lupa del peritaje técnico los conflictos sociales desaparecen y se transforman en asuntos individuales frente a los que las personas no han logrado una solución satisfactoria.” (González y Leopold, 2011, p.53)

De esta forma, González y Leopold (2011), exponen que a través del contenido individualizante y estigmatizador de las situaciones familiares que ingresan al sistema judicial se judicializan conflictos de origen socio-económico que exponen a los sectores sociales más vulnerables al control y la supervisión del Estado. Según las autoras, a través del diagnóstico social que se realiza en el proceso de intervención judicial con la familia, se expone la vida del individuo al juicio experto que estudia toda su trayectoria biográfica del sujeto, al que se responsabiliza de los riesgos asumidos a partir de las decisiones que ha adoptado en su vida. Siguiendo esta línea, los sujetos quedan expuestos a la mirada de técnicos que toman decisiones, cuestionan y forman opinión a partir de una foto de la realidad de esas personas o familias sin problematizar las múltiples causas, relaciones y procesos que determinan o determinaron la dinámica familiar.

En concordancia con lo expuesto, Donzelot (1998) expresa:

“Atrapada en esa doble red de tutores sociales y de técnicos, la familia aparece como colonizada. Ya no hay dos instancias frente a frente: la familia y el aparato, sino una serie de círculos concéntricos en torno al niño: el círculo familiar, el círculo de los técnicos, el círculo de los tutores sociales. Paradójico resultado de la liberalización de

la familia, del nacimiento de un derecho del niño, del reajuste de la relación hombre-mujer: cuanto más son proclamados estos derechos, más se estrecha alrededor de la familia pobre el cerco de un poder tutelar.” (Donzelot, 1998, p.106)

Para González y Leopold (2011) la judicialización de los conflictos sociales y familiares produce efectos sobre los sujetos destacando como el más inmediato la sobreexposición de las familias ante un sistema experto que construye una descripción de las mismas para ser juzgadas y catalogadas:

“(…) la situación familiar queda exhibida públicamente en el sistema de justicia, que se dedica a evaluar sus actitudes y comportamientos respecto al vínculo con la pareja, la crianza de los hijos, la forma de educarlos y sancionarlos y la forma en que resuelven sus asuntos económicos.” (González y Leopold, 2011, p.53)

En concordancia con lo expuesto, es pertinente reflexionar acerca de la estigmatización a la que se expone al individuo en este proceso como otra consecuencia de la judicialización de los problemas individuales. El hecho de que exista una intervención judicial en la situación familiar denota que de alguna forma hubo una incapacidad o deficiencia de los referentes adultos para garantizar el cuidado del niño.

Si bien cualquier familia podría ser objeto de intervención, no se interviene en todas, de esta forma se le adjudica a las familias intervenidas un rótulo que, siguiendo a Goffman (1993), podría referenciarse como estigma, que inhabilita para una plena aceptación social. De acuerdo a lo expresado por el autor, la sociedad establece los medios para categorizar a las personas y para cada categoría los atributos que se perciben como corrientes y naturales de cada miembro. Estos atributos van a catalogar la identidad social de cada individuo incluyendo atributos personales y estructurales. Lo que puede suceder es que el individuo presente un atributo diferente a los demás convirtiéndolo en una persona “menos apetecible” (por ejemplo, estar vinculado a un proceso judicial por vulneración de derechos). Siguiendo a Goffman, “Un atributo de esa naturaleza es un estigma, en especial cuando el produce en los demás, a modo de efecto, un descrédito amplio; a veces recibe también el nombre de defecto, falla o desventaja.” (Goffman, 1993, p. 12)

En estrecha relación con lo anteriormente expuesto, un aspecto sumamente importante en cuanto al proceso judicial en el Juzgado de Familia es que los expedientes de las situaciones de los niños y adolescentes son públicos. Esto significa que cualquier persona mayor de edad puede acceder a la lectura del mismo tomando conocimiento de toda la información que se encuentra allí (informes, declaraciones, denuncias, resoluciones, peritajes, exámenes, etc.). En este sentido, una de las entrevistadas, acota que en aquellas situaciones donde el Juez entiende que los técnicos del ITF pueden aportar al entendimiento o esclarecimiento de la situación, se dispone directamente la presencia del técnico para ser escuchado en audiencia. En sus palabras: “(...) el informe lo puede leer mucha gente, entonces, a veces si citas puedes tener la opinión sin estigmatizar más o dañar más a ese niño. Porque todo el mundo lee y sabe que pasaron determinadas cosas.” (Entrevista A).

Para Costa y Gagliano (2000), la intervención del juez culmina con un enunciado performativo que “hace actuar” sin considerar condiciones sociales y familiares previas asignándole al sujeto sus próximos espacios de circulación y pertenencia:

“El enunciado performativo no revela en ese niño a un menor, sino que construye o crea una identidad que ya forma parte de un horizonte común de creencias. La palabra del juez transforma al niño en menor, esto es, lo sujeta políticamente al Estado y reorienta definitivamente todas las propuestas de identificación que lo confirmaran en la identidad “sustantiva” de menor.” (Costa y Gagliano, 2000, p.112)

Teniendo presente el artículo n° 7 del C.N.A, la intervención del Estado en pos de la protección de los derechos de los niños debe estar orientada también al diseño e implementación de políticas públicas que abarquen los ámbitos de infancia, adolescencia y familia. La intervención que realiza el Poder Judicial como parte del Estado y como parte del proceso de protección de los derechos que se enmarcan normativamente se va a basar específicamente en resolver los conflictos que se dan en cada situación particular sin pretender abordar la misma desde una perspectiva social de promoción, por este motivo la resolución de la misma no puede quedar sólo en el ámbito jurídico.

Siguiendo lo expresado por Erosa (2000)

“La incapacidad institucional para formular proyectos no institucionalizadores que permitan ir desarrollando, con trabajos comunitarios en el medio donde viven los niños, la promoción social del conjunto de la familia, no percibe que la política de internación es asimismo una política de inasistencia y abandono a la familia.” (Erosa, 2000, p.20)

El autor cuestiona la intervención que realizan los operadores de la justicia exponiendo que la misma se valida en base a los conceptos de protección, desamparo o defensa social cuando en realidad no están reconociendo la otra cara de la intervención proteccionista que es la represión. De esta forma, si bien el último recurso debe ser la separación del niño o adolescente de su familia de origen se termina recurriendo a la internación dada la incapacidad de elaborar programas de efectivización de derechos en libertad.

Una de las entrevistadas reflexiona desde su perspectiva profesional en cuanto a la capacidad del Juez de modificar una situación donde está en juego la protección de los derechos de los niños. Considera que “solo el Juez es muy poco lo que puede hacer (...) En aquellos casos donde se ve que realmente una intervención judicial habilitó y posibilitó determinados procesos es cuando junto a eso ha habido otros equipos que han sabido articular.” (Entrevista A) La entrevistada expresa que tiene que existir una alianza con diferentes instituciones que puedan continuar y abordar los procesos que el Juez determina efectivizándose de este modo el cambio. Este pensamiento se relaciona con lo expresado por Erosa (2000) quien remarca la importancia de que institucionalmente existan programas y proyectos acordes de trabajo con la familia no institucionalizadores que permitan efectivizar derechos.

En concordancia con lo expuesto, Costa y Gagliano (2000) aportan que existe una necesidad y verticalidad de poner al sistema bajo la órbita de los profesionales de la justicia (“los que saben”) ya que al contener el saber legal las acciones son legítimas y consistentes. Sin embargo, realizan una salvedad expresando que los saberes judiciales no han sido pensados ni puestos en duda, afirmando que:

“No será desde dentro de la estructura del sistema judicial que dichos saberes positivos que capturan la niñez abandonada puedan ser problematizados. Los saberes constituidos, en la misma área, no pueden generar los procesos de pensamientos que los pongan en duda.” (Costa y Gagliano, 2000, p.99)

Sumado a ello, los autores expresan que la lectura en los fenómenos de minoridad que realiza el marco legal se basa en estructuras rígidas inscriptas en el concepto tradicional de familia protocolo utilizado en el modelo de estado conservador – benefactor incorporando a los niños en el campo de la protección asistencial. Señalan que ese Estado es mínimo y está en retirada, sin embargo, a pesar del cambio de rol no lidera nuevas políticas generando que las cuestiones de infancia sean atendidas por el sistema judicial-policial.

Este corrimiento de las cuestiones de infancia hacia el sistema legal tiene que ver también con la realidad actual de un aumento de la judicialización de conflictos de carácter social. Costa y Gagliano (2000) lo plantean como una paradoja en el sentido de que, si bien existe un aumento de los instrumentos legales de protección hacia determinados sectores como adultos, niños y otros colectivos, consideran a su vez que nunca hubo tantas personas con derechos vulnerados.

“Pareciera que hemos adoptado como moda o imperativo cultural una definición de la infancia desde la perspectiva judicial de los derechos de los niños. (...) Hemos favorecido este imperativo cultural porque en la moral de nuestra época, es decir, en el promedio de conductas de nuestro tiempo, los conflictos se dirimen en tribunales, donde concurren sujetos inscriptos en las mismas asimetrías de poder, información y voz que les dieron identidad.” (Costa y Gagliano, 2000, p.117)

En lo que respecta a la creciente judicialización de los problemas sociales, Vecinday (2015) expone que se registra una tendencia a la expansión del ámbito socio-judicial lo cual indica una creciente penetración del derecho en la organización de la vida social, observándose en diversos ámbitos como por ejemplo relaciones de familia, conflictos laborales, tránsito, datos personales, etc. Para la autora, este fenómeno no indica necesariamente que exista un aumento de conflictividad social, sino que la creciente

demanda socio jurídica da cuenta que cada vez más se recurre a este ámbito para resolver conflictos interpersonales e institucionales con el fin de efectivizar derechos que se creen vulnerados.

Al mismo tiempo, Vecinday (2015) plantea que el Poder Judicial pasa a ser visto como garante de derechos ante las consecuencias del neoliberalismo como por ejemplo la cuestión social:

“Muchas de las situaciones judicializadas, fundamentalmente en el ámbito del derecho de familia, se explican por la precariedad y pobreza de la intervención de las instituciones prestadoras de servicios sociales y, por supuesto, por la precariedad y pobreza de las situaciones familiares que son objeto de intervención.” (Vecinday, 2015, p. 85)

Por otro lado, Erosa (2000) plantea que hay situaciones en que la intervención judicial debe ser necesaria justamente aquellas donde se considere que en la resolución del conflicto social se van a vulnerar derechos. Expone que la desjudicialización no es abandono judicial de la protección de los derechos del niño, sino que el sistema judicial no debería cumplir el rol de las áreas sociales ya que no lo va a poder llevar a cabo culminando en una mera intervención simbólica. El hecho de que el sistema judicial intervenga sobre conflictos que no sean de naturaleza jurídica implica que asuma un rol funcional al ocultamiento de las reales soluciones a los conflictos.

“Ese rol la llevará a intervenir de la peor forma, vulnerando derechos del sujeto más débil: el niño. En ese caso reafirmará la centralidad de la internación con el grado de violencia que esto apareja y hará uso del Derecho como instrumento de control del niño, descalificando el momento jurídico. Esta actitud conlleva la construcción punitiva del abandono, vinculándolo a la pobreza y a una moral homogeneizada, dejando aparecer la selectividad del sistema.” (Erosa, 2000, p.30)

Velurtas (2009) plantea que muchas de las situaciones que ingresan al sistema judicial⁸ provienen de un contexto de complejidad social sumado al creciente proceso de empobrecimiento de las instituciones clásicas de apoyo como ser escuela, centros de salud así como también instituciones específicas de atención al consumo problemático, situaciones de calle, etc. La autora destaca que, al ingresar al sistema judicial, las familias pueden ser muchas veces estigmatizadas generando además que las mismas mantengan una actitud permeable y acrítica frente a las indicaciones, propuestas y resolución del juez actuante. Frente a ello, según expresa, es de suma importancia cuidar cómo se realiza el primer contacto, brindando la información necesaria, escucha, tratando de establecer una relación horizontal desde el primer contacto.

Por otro lado, en lo que respecta al planteo de la autora en cuanto a poder establecer una relación horizontal con la familia es apropiado hacer mención al lenguaje técnico utilizado en el ámbito judicial. Desde el Poder Judicial de nuestro país se reconoce un fallo en este sentido, que aleja al ciudadano común del propio sistema siendo imprescindible por tanto una comunicación entre las partes a través de un lenguaje común.

“La justicia es pues a la vez un concepto, una función y un servicio público. El lenguaje jurídico, sin embargo, es un lenguaje técnico, no suficientemente incorporado en el cuadro de la educación cívica. Se señala, en este sentido, que el ciudadano está en situación de incultura jurídica y judicial y que la justicia es uno de los servicios públicos donde se siente más desamparado.”⁹

En el ámbito judicial, un lugar donde cada vez más se dirimen situaciones y conflictos sociales, se torna relevante la mirada de técnicos que puedan aportar al tratamiento de la situación de forma que la intervención judicial no quede solamente como un mandato del Juez. No es menos importante señalar que lo antes dicho, se enmarca en que la decisión de recurrir a la mirada de un técnico social depende directamente del Juez actuante y su consideración en cuanto a contar con un punto de vista diferente al de su

⁸ En el artículo, la autora hace mención principalmente a la intervención penal adolescente pero el análisis que realiza en torno a la relación juzgado-familia se generaliza a situaciones de niños y adolescentes.

⁹ Extraído de www.poderjudicial.gub.uy (acceso 30/04/2019)

formación. En las entrevistas realizadas para la presente investigación, se plantea esta cuestión y de las mismas surge que depende de cada Juez el tratamiento que le va a dar a la situación y si recurrirá o no a los informes de técnicos sociales.

“(…) creo que el Poder Judicial ha ido haciendo una transformación en estos treinta años, en el sentido de escuchar a los técnicos, al técnico social, psicólogo o equipo técnico de I.N.A.U. al que le pide intervención y ha ido como abriéndose a las opiniones o sugerencias. Depende también de las individualidades, hay Jueces que son más abiertos a escuchar y otros Jueces que en realidad ya tienen una posición tomada o la toman en el momento con los insumos que tienen en el momento.”
(Entrevista B)

En este contexto, interesa también mencionar cuál es el rol que cumple el Trabajo Social en el proceso judicial una vez que el Juez considera necesario y solicita la intervención de este profesional. Según lo expresado por Mijalofsky y Salerno:

“Los informes sociales requeridos a los trabajadores sociales en su función pericial, se constituyen en algo así como una fotografía de la familia y de sus miembros. De allí la necesidad de marcar muy clara y explícitamente que lo vertido en el informe es el recorte que el profesional desde su perspectiva teórico-práctica hace de una situación en proceso y factible de transformarse, de evolucionar.” (Mijalofsky y Salerno, 2005, p.75)

Para los autores, el Trabajo Social en el ámbito judicial tiene que hacer una deconstrucción de la situación que llevó a la intervención de dicho ámbito, de manera de poder dar cuenta de la mayor cantidad de elementos que permitan comprender la situación por la que atraviesa la familia de forma de identificar y trabajar las redes vinculares y sociales de apoyo que les permitan superar la crisis que se le presenta.

Según lo relatado por la entrevistada A, una vez que le es solicitado intervenir en una situación, lo primero que realiza es la lectura del expediente judicial formado de la misma. En dicho archivo, además de tener un primer acercamiento general a la situación problema, se realiza una lectura desde la especificidad de la profesión de Trabajo Social

quizás pueda detectar o profundizar aspectos que no fueron tenidos en cuenta y que son importantes para la resolución del conflicto o las sugerencias que se pueda realizar.

En este sentido, destaca como importante la autonomía técnica (ligada al compromiso ético) que le posibilita adecuar las estrategias y las técnicas de intervención de acuerdo a las consideraciones que tenga sobre la situación. La intervención culmina con un informe social dirigido al Juez: “El informe tiene que tener un diagnóstico de la situación y específicamente en relación a la denuncia también. Tiene que tener presente eso, se están vulnerando derechos, sí o no.” (Entrevista A)

Para finalizar, es pertinente hacer mención a aquellos aspectos que las técnicas entrevistadas reconocen como fortalezas y debilidades de la intervención judicial en las situaciones que afectan a niños/as. Por un lado, una de las entrevistadas visualiza como uno de los aspectos a destacar el proceso que ha venido realizando el Juzgado de Colonia en lo referente a que los jueces puedan contar con un asesoramiento profesional de técnicos peritos de I.T.F. Además de poder contar con otra mirada diagnóstica y complementaria de la situación, es importante para la entrevistada que los peritos al ser parte de la institución judicial y en muchos casos desarrollando sus funciones en otras localidades pueden realizar una evaluación más objetiva de la situación por encontrarse fuera de ella. Esto contribuye a la neutralidad en el análisis de la situación del niño, despojándola de estigmatización como ocurre en algunas situaciones en aquellas comunidades pequeñas como son las ciudades del interior del país.

Por otro lado, la entrevistada B visualiza como positivo el hecho de que los profesionales judiciales que intervienen en la situación de niños en el Juzgado de familia de Colonia tengan cierta apertura a escuchar a los equipos técnicos de I.N.A.U. o a diferentes instituciones que hayan intervenido con anterioridad en la situación abordada. A su entender:

“Eso es una fortaleza que afecta positivamente en la familia, en el niño y otra también la comunicación, que además de la instancia de audiencia hay una comunicación más fluida con defensoría, con abogados defensores, entonces eso

hace que en realidad se tomen decisiones en cuanto a niños y adolescentes que están consensuadas, y pensadas.” (Entrevista B)

En lo que refiere a aquellos aspectos que se consideran a mejorar o que se conforman como debilidad, una de las entrevistadas, hace énfasis, en lo mencionado anteriormente en cuanto a la situación de desborde que muchas veces se vive en el Juzgado de Colonia por la cantidad de expedientes a resolver. Esto está estrechamente vinculado al hecho de que el mismo sea un Juzgado multimateria que atiende todas aquellas situaciones concernientes a un Juzgado de Familia sin tener una especificidad en derechos de niños y adolescentes con las consecuencias que esto conlleva.

En este punto, otra de las entrevistadas considera que la demora al momento de celebrar audiencias para definir el curso de las situaciones es una debilidad por tratarse de la vida de niños y el tiempo que implica para estos estar a la espera de una resolución. Por otra parte, agrega que el ámbito judicial por sí mismo es un ámbito que pone en tensión a las personas, mucho más a un niño sumado a que las condiciones de infraestructura no promueven que dicho ámbito sea más amigable. Los tiempos de espera y los escenarios son lugares, donde muchas veces se encuentran todos los involucrados en la situación generándose instancias de nerviosismo e incomodidad para el niño.

CONCLUSIONES

Para finalizar la presente monografía se expondrán las principales reflexiones a las cuales se ha arribado una vez finalizada esta investigación. En primera instancia, se plantearon los objetivos de investigación consistentes en analizar la intervención del Poder Judicial en las situaciones de denuncia de vulneración de derechos hacia niños y niñas (amparadas en el artículo 117 del C.N.A.) en la ciudad de Colonia en el periodo comprendido de 2013-2018. Específicamente, se intentó identificar las principales causas que dan inicio a la intervención judicial con las familias describiendo a su vez de qué forma se da la misma y los procesos que esta genera.

Para ello, se seleccionó la metodología cualitativa con el fin de poder realizar el trabajo propuesto y dar respuesta a los objetivos planteados a través de la realización de entrevistas y mediante el análisis de documentación.

Como punto de partida, se realizó una breve conceptualización histórica de la concepción de familia dando cuenta de la evolución de los procesos que gestaron dicha institución y cómo la misma fue cambiando a lo largo del tiempo estando ello estrechamente vinculado a los intereses del modelo social, político y económico de cada época. De la misma forma y ligado a los mismos procesos, se da cuenta del camino recorrido en cuanto a las estrategias de atención y protección focalizadas hacia la infancia. A partir del análisis realizado surge que los sistemas de protección hacia la infancia y la intervención estatal con las familias estuvieron vinculadas a las funciones de vigilancia y control por parte del Estado como forma de hacer frente a las consecuencias de la cuestión social. Por este motivo, las primeras políticas de atención dirigidas a esta población fueron enmarcadas en la concepción de la “Situación Irregular” asentándose sobre bases diferenciadas por la clase social de las familias donde se fijaban las acciones o medidas a tomar. En este contexto los estratos sociales pobres son el foco privilegiado de atención estatal registrándose una vinculación entre pobreza y peligrosidad.

El cambio de paradigma el cual hace referencia a la “Protección Integral de la infancia”, implicó un cambio radical en la forma de pensar, atender y proteger a los niños y adolescentes trasladándose a la modificación legislativa en materia de derechos del niño y

del adolescente culminando ello con la aprobación de un nuevo Código que se encuentra vigente hasta el día de hoy. Si bien, esto supuso un avance sumamente importante en cuestión de derechos de la infancia, algunos conceptos que allí se enuncian al momento de ser puestos en práctica no tuvieron el andamiaje deseado en lo que refiere a protección. El proceso de transformación ha sido arduo, dado que no solo implicó un cambio en la legislación, sino también un cambio radical en el modo de accionar y pensar de los actores intervinientes en materia de infancia y familia.

Al mismo tiempo, no se debe dejar de lado el impacto de las consecuencias del modelo socio económico a saber: exclusión social, desempleo estructural, pobreza, que contextualiza la realidad actual. La incidencia de la pobreza en las situaciones familiares tiene estrecha vinculación en su reproducción cotidiana, los niños dependen de los adultos, y estos se encuentran con una incapacidad en el acceso a recursos y participación repercutiendo directamente en la situación de los mismos.

En este contexto, parafraseando a Costa y Gagliano (2000) con el abandono del modelo de Estado conservador – benefactor que implica un Estado que se encuentra “en retirada”, las familias deben garantizar la protección integral de los derechos de sus niños. Ante el incumplimiento de garantizar estos derechos, el Estado interviene interpelando a través del Poder Judicial, y específicamente del Juzgado de Familia, a los referentes adultos a fin de que la situación se revierta.

De las entrevistas realizadas se destaca que, en la ciudad de Colonia, en las situaciones de denuncia que involucran a niños, interviene el Juzgado de Familia. El mismo tiene la particularidad de que es un Juzgado multimateria, no especializado en infancia y adolescencia, atendiendo este una variedad de demandas lo que muchas veces genera según los entrevistados un desborde de situaciones a atender. Como aspecto a resaltar, el Juzgado cuenta con equipo técnico de Instituto Técnico Forense por lo que si el Juez entiende pertinente puede solicitar y contar con informes elaborados por diversos técnicos contribuyendo ello al análisis y resolución del conflicto presentado.

En lo que respecta a las características de las familias atendidas en la instancia judicial, las entrevistadas coinciden en que la mayoría corresponden a familias con bajos

ingresos económicos, en situación de pobreza y exclusión social. Esto nos hace pensar en que aún hoy, a pesar del respaldo normativo en la promulgación de derechos de la infancia, se sigue perpetuando soslayadamente aquella noción de vincular los conceptos de pobreza, con abandono y peligrosidad.

Surge de la información brindada por las entrevistadas, que muchas veces el Juez por si solo es muy poco lo que puede hacer para modificar la situación en la que se encuentra el niño. El Juez determina lo que “se debe” hacer de acuerdo a la autoridad que representa, pero si no hay políticas y programas de atención a la familia y la infancia, equipos que puedan trabajar en territorio brindando apoyo, orientación y recursos, son pocas las posibilidades de que pueda generarse una modificación estable y duradera de la misma.

Cabe mencionar, que la elaboración de la presente monografía significó un proceso arduo de definición del objeto de estudio dado que la temática en si tiene una amplitud de especificidades que van generando a su vez nuevas interrogantes.

Se pretendió estudiar una parte del proceso de intervención judicial en las situaciones de vulneración de derechos de la infancia, pero quedan cuestiones pendientes de estudio. Algunas de ellas refieren, por ejemplo en profundizar en el tipo de respuesta que brinda el Juez, qué sucede en aquellas situaciones en donde se constata vulneración de derechos, en qué situaciones se determina la separación del niño de su familia de origen, qué recursos existen para abordar dichas situaciones a fin de evitar que ingresen a la instancia judicial, entre otros aspectos.

Por último, se considera relevante retomar lo expresado por Velurtas (2009) quien afirma que los cambios que se han venido plasmando con la progresiva incorporación de la perspectiva de derechos de los niños y adolescente, requieren de un sistema de apoyo social que en el marco del deterioro del Estado y de las políticas públicas implementadas, brinde el soporte para incorporar la nueva legislación en términos de inclusión y derechos de ciudadanía. La niñez y adolescencia es una etapa que requiere políticas públicas, de información y muchas veces de asistencia que posibilite el acceso a esos bienes/derechos de los cuales muchos de ellos son excluidos por su condición de pobreza, por decisión o

desconocimiento de los adultos con quienes conviven y por negligencia de las instituciones donde se incluyen o excluyen.

En este contexto el Trabajo Social tiene mucho para aportar por ejemplo generando espacios de reflexión y articulación con los equipos de las diferentes instituciones que intervienen en el área de infancia a fin de poder trabajar desde un enfoque de derechos con prácticas que reflejen y operen en la protección de los mismos. Destacando en este marco, la importancia de que los Juzgados de Familia puedan contar con la asesoría en esta materia teniendo en cuenta que se encuentran en una institución enmarcada en el complejo tutelar.

BIBLIOGRAFIA

- ARRIAGADA, IRMA (2007). *“Familias y políticas públicas en América Latina. Una historia de desencuentros”*. Naciones Unidas, CEPAL. Santiago de Chile.
- BARRAN, JOSE PEDRO (1992). *“Historia de la sensibilidad en el Uruguay. Tomo 2. El disciplinamiento (1860-1920)”*. Ediciones de la banda oriental. Montevideo, Uruguay.
- BATTHYÁNNY, KARINA; CABRERA MARIANA (2011) *“Metodología de la investigación en Ciencias Sociales. Apuntes para un curso inicial”*. Universidad de la Republica. Montevideo, Uruguay.
- COSTA, MARA; GAGLIANO, RAFAEL (2000) *“Las infancias de la minoridad. Una mirada histórica desde las políticas públicas”* En DUSCHATZKY, SILVIA (compiladora) *Tutelados y asistidos. Programas sociales, políticas públicas y subjetividad*. Paidós. Buenos Aires, Argentina.
- DE MARTINO, MONICA (2011). *“Prácticas Profesionales en el Campo Socio-Jurídico. Notas sobre una institución burocratizada”* Editorial Académica Española. Alemania.
- DONZELOT, JACQUES (1998). *“La policía de las familias”* Pre Textos. Valencia, España.
- GOFFMAN, ERVING (1993). *“Estigma. La identidad deteriorada”* Amorrortu editores. Buenos Aires, Argentina.
- GONZALEZ CAROLINA, LEOPOLD SANDRA (2011). *“Discurso del riesgo y prácticas diagnosticas con niños y adolescentes en el ámbito socio-judicial.”* Ediciones Universitarias. Montevideo, Uruguay.
- IGLESIAS, SUSANA; EROSA, HECTOR (2000) *“El abandono y su construcción punitiva”* Centro de Formación y estudios del INAME. Serie materiales de apoyo. Montevideo, Uruguay.
- LOPEZ, CLAUDIA; VITALE, GABRIEL; OLIVETO, JUAN; ARANDA, ANA; AZCONA, ELIZABETH; ABALOS, CECILIA; MIGUEL, MARIA (2008) *“El desafío de prácticas cotidianas que respeten y garanticen los derechos de infancia y*

- adolescencia*” En Revista Regional de Trabajo Social N° 43. Editorial Eppal. Montevideo, Uruguay.
- MIJALOFKY, MARTHA; SALERNO, FERNANDO (2005) “*La intervención del Trabajo Social y las pericias judiciales*” En Espacio Abierto N° 3. Colección Hemeroteca. Montevideo, Uruguay.
 - MORAS, LUIS (2012) “*Los hijos del Estado. Fundación y crisis del modelo de protección-control de menores en Uruguay*” Facultad de Ciencias Sociales-SERPAJ. Montevideo, Uruguay.
 - PORTILLO, ALVARO (1989) “*Estado y minoridad en Uruguay*” Editorial Roca Viva. Montevideo, Uruguay.
 - SERNA, MIGUEL (Coord.) (2010) “*Pobreza y (des)igualdad en Uruguay: una relación en debate*” UDELAR – FCS – Depto. Sociología. Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo – Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Montevideo, Uruguay.
 - VECINDAY, LAURA (2015) “*La ampliación del ámbito socio-judicial: entre la judicialización de lo social y el acceso a la justicia*” En revista Escenarios Año 15, N° 22. Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Espacio Editorial. Buenos Aires, Argentina.
 - VELURTAS, MARCELA (2009) “*Acerca de reformas y prácticas profesionales en el ámbito de la justicia penal de menores. Tensiones inherentes a dicho proceso: instituciones, profesionales y familias*” En Infancia, Familia y Género. Múltiples problemáticas, múltiples abordajes. Compiladora Mónica de Martino. Ediciones Cruz del Sur. Montevideo, Uruguay.

FUENTES DOCUMENTALES

- Convención sobre los derechos del niño (1989). UNICEF.
- Código de la Niñez y la Adolescencia de la República Oriental del Uruguay. (2004)
- Principales resultados Encuesta Continua de Hogares 2014. Extraído de <http://www.ine.gub.uy/web/guest/encuesta-continua-de-hogares>(acceso 22/01/2019)
- SAUTU, RUTH; BONIOLO, PAULA; DALLE, PABLO; ELBERT, RODOLFO (2005) “*La construcción del marco teórico en la investigación social*” En

publicación: Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. CLACSO. Argentina. Disponible en la WEB:

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/metodo/RSCapitulo%201.pdf>

(acceso 28/08/2018)

- VALLES, MIGUEL. (1999). *“Técnicas cualitativas de investigación social”* Editorial Síntesis. Madrid, España. Disponible en la WEB:

[https://eva.udelar.edu.uy/pluginfile.php/1022379/mod_resource/content/1/Valles%20C%20Miguel%20%281999%29%20Tecnicas Cualitativas De Investigacion Social.pdf](https://eva.udelar.edu.uy/pluginfile.php/1022379/mod_resource/content/1/Valles%20C%20Miguel%20%281999%29%20Tecnicas%20Cualitativas%20De%20Investigacion%20Social.pdf) (acceso 01/09/18)

- Página web del Poder Judicial: www.poderjudicial.gub.uy(acceso 30/04/2019)